

ARGENTINA

Guerra sorda en las fronteras argentinas. Preparando el retorno al poder

El allanamiento efectuado por la policía uruguaya en el restaurante «California» y los domicilios de dos exilados argentinos, ha conducido —según el comunicado de la Jefatura de policía de Montevideo— al descubrimiento de «un comando revolucionario peronista, que trataba de comprar en Alemania armas y municiones con destino a la República Argentina, con el fin de entregarlas a personas que alientan la esperanza de reponer en el Gobierno al ex presidente Perón».

Setenta y ocho personas fueron detenidas con ese motivo, y diecisiete de ellas han sido confinadas por haber violado el derecho de asilo. Entre los detenidos figuraba el general José Embrioni, que fué subsecretario del Ejército durante el régimen peronista; el vicealmirante José Arce; el capitán Rocataglia; el comodoro Horacio Pons Bedoya, que fué jefe de propaganda del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el ex diputado Eduardo Colom.

Según los exilados argentinos, la dimisión del ministro del Interior uruguayo, Dr. Alberto Abdala, no es

ajena a los hechos que acaban de culminar con la detención de setenta y ocho personas. «Tenemos nuestra propia versión sobre la caída de Abdala y su oposición a la adopción de medidas que infringieran las normas del derecho de asilo en perjuicio de los asilados, sea cual fuere su ideología», han dicho.

**Diez mil exilados.**—No es esta la primera vez que los diarios uruguayos se refieren a las actividades de los exilados argentinos. Desde que fué depuesto el régimen peronista en septiembre de 1955, muchos de sus principales dirigentes huyeron a los países vecinos, y comenzaron a preparar el retorno. Sus actividades y los contragolpes organizados desde Buenos Aires han dado lugar a una guerra silenciosa, que en algunas ocasiones ha trascendido hasta las páginas de la prensa.

Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, limítrofes con Argentina, son el centro de estas operaciones, aunque la tragedia del exilio, que afecta a 10.000 argentinos, según algunas versiones, se extiende por toda América y ciertos países europeos, poniendo su centro motor, que planea el retorno, en Caracas, donde reside el ex presidente Juan Domingo Perón.

**Uruguay.**—Actualmente hay en el Uruguay 1.081 exilados peronistas. No es difícil llegar a la República Oriental cruzando a nado el río Uruguay, o navegando amparados en las sem-

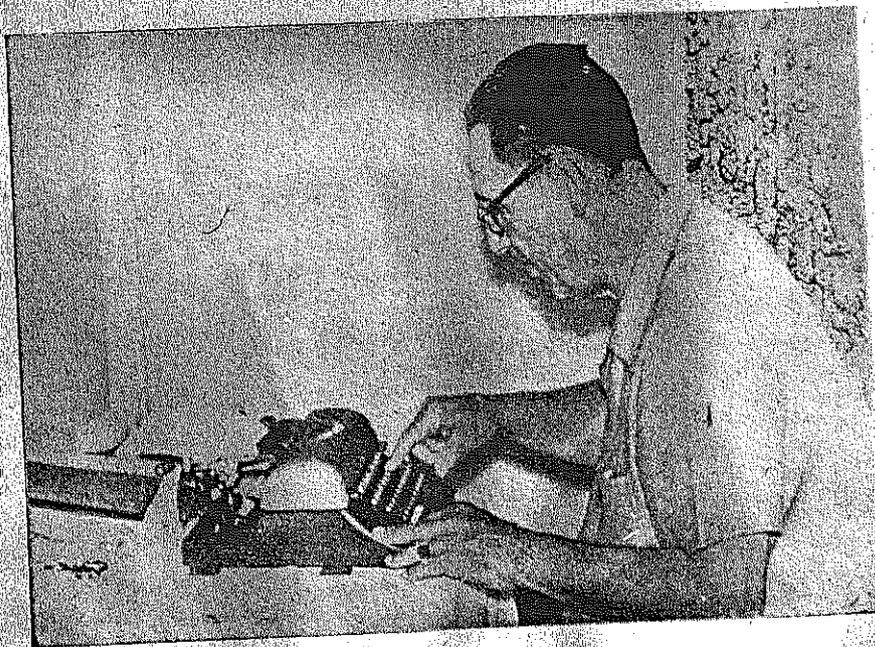
bras de la noche a través de las mil islas del delta de Río de la Plata. Así han encontrado asilo político muchos argentinos —como el capitán Phillippeaux, que dirigió el alzamiento peronista en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa el 9 de junio del pasado año, y escapó hace dos meses de la cárcel donde se encontraba detenido—. Otros han solicitado espectacularmente el asilo cuando eran trasladados a Europa, en virtud del derecho de opción concedido por el Gobierno Provisional argentino de continuar detenidos o dirigirse a un país situado fuera del continente. Así lo hicieron Vittorio Felice Radeglia, ex secretario particular de Perón; la profesora de Filosofía, Alicia Eguren, y Raúl Puigbó, alto funcionario del Ministerio de Trabajo durante el Gobierno de Leonardi.

Las actividades de estos hombres, en un país tan próximo a Buenos Aires, preocupan a las autoridades revolucionarias, y la prensa uruguaya ha dado cuenta de sucesos extraños, como el rapto del ex diputado Rumbó y del juez Rivas Argüello, secuestrados por los «comandos civiles» que extienden su acción más allá de las fronteras argentinas, o el asalto al domicilio del ex diputado Eduardo Colom, que fué director del diario *La Época*. Tales hechos han provocado delicadas situaciones y reclamaciones diplomáticas de la Cancillería uruguaya a la Casa Rosada.

**Paraguay.**—Asunción fué también el escenario de la acción de los «comandos civiles» hace algo más de un año, cuando raptaron a Vittorio Felice Radeglia —una especie de secretario-ayuda de cámara de Perón en el exilio—, que había llegado a la capital paraguaya con instrucciones y mensajes para los argentinos allí residentes. Radeglia permaneció detenido un año en Buenos Aires, y cuando era trasladado a su país natal, Italia, solicitó el derecho de asilo en Montevideo.

En Paraguay se muestran activos, según datos facilitados por el Gobierno argentino, con motivo del descubrimiento de un complot en el mes de febrero, Raúl Conrado Bevacqua, ex ministro de Salud Pública; el periodista Luis María Albamonte «Americo Barnes», y el dirigente nacionalista Queraltó.

**Bolivia.**—En los primeros días de enero, los diarios de La Paz refirieron que el coche del Embajador argentino en Bolivia había sido ataca-



El ex-presidente Perón: libro a la vista

do a tiros cuando descendía hacia la capital desde el aeropuerto de El Alto. Dos meses después daban cuenta del intento de asalto a la Embajada por un grupo de exilados. La policía boliviana no pudo, finalmente, esclarecer estos dos incidentes que, según la versión de los exilados, fueron frustrados por la propia Embajada.

En Bolivia residen Alberto J. Iturbide, ex ministro de Transportes de Perón; Claudio Francia Adiego, ex fiscal de la provincia de Salta; el ex embajador Babio, que fué Presidente del Bloque Único en la Cámara de Senadores y el periodista Fernando García de la Costa.

**Chile.** — La espectacular fuga del «estado mayor peronista» desde la Penitenciaría de Río Gallegos, en la Patagonia, hasta Punta Arenas, conmocionó hace tres meses a todo el mundo. La solicitud de extradición presentada inmediatamente después por el Gobierno argentino, ha prestado en juego el alcance y validez del derecho de asilo y movilizado a las más destacadas personalidades del foro chileno.

En Santiago, los seis dirigentes aguardan el fallo del tribunal. Son John William Cocke —el «Delfín» del Movimiento Peronista—; el financiero Jorge Antonio; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor J. Campora; el jefe de la Alianza Libertadora Nacionalista (fuerza de choque del peronismo), Guillermo Patricio Kelly; el ex secretario general de la CGT, José Espejo y el ex diputado y dirigente sindical José Gomis.

El «estado mayor peronista» ha formulado unas declaraciones a los periodistas chilenos, diciendo que teme ser objeto de un atentado o secuestro por parte de los «comandos civiles», que también operan en Santiago, como se comprobó cuando resultaron asaltados los domicilios de César Albistur Villegas, ex intendente de la ciudad de Morón y el capitán Sarmiento, quienes residen en Chile junto con Ricardo Guardo, ex presidente de la Cámara de Diputados; el ex diputado José Astorgano; el ex gobernador Durán, el ex senador Madariaga y otros dirigentes. Algunos de ellos han abierto en Santiago un restaurante, «Neptuno», donde los clientes son servidos por camareros improvisados, que hasta hace poco eran generales, diplomáticos o senadores.

A través de las largas fronteras argentinas con estos países, la guerra



Jorge Antonio: financiero peronista

prosigue. Los arrieros pasan clandestinamente consignas del Movimiento Peronista, ejemplares del libro prohibido *La fuerza es el derecho de las bestias*, y emisoras fantasmas transmiten, a través de la cordillera andina o las selvas del noroeste, mientras que hombres de los «comandos civiles revolucionarios» siguen los pasos de los principales dirigentes exilados.

## BOLIVIA

### “El milagro”

Hace unos días el presidente Hernán Siles se encontraba en su despacho, del Palacio Quemado (Casa de Gobierno), cuando le informaron que un grupo de personas se dirigía al Palacio Legislativo profiriendo gritos contra el presidente del Senado, Juan Lechín, y lanzando piedras contra el retrato del conocido dirigente minero, que se hallaba colgado de uno de los balcones del edificio.

El presidente Siles salió del palacio y se dirigió a pie hacia el grupo de personas, que en aquel momento se disponía a incendiar el automóvil del dirigente sindical E. Rodríguez, estacionado frente al palacio Legislativo. Subiéndose sobre el vehículo, el presidente Siles dijo a la multitud congregada en la Plaza Murillo: «Los grandes problemas de Bolivia no se solucionan con piedras, ni con balas, ni con insultos. El país necesita, ahora más que nunca, unidad».

Era la tercera alocución que había pronunciado aquel día el presidente de la República. Antes había tenido que llamar a la cordura a los miem-

bros del Congreso Obrero reunido en La Paz, que amenazaban con declarar la huelga general el día 1 de julio si el Gobierno no subía los salarios para esa fecha. Por fin, cuando faltaban nada más que unas horas para que comenzara la huelga, el presidente logró convencer a los dirigentes sindicales de que anularan la orden.

**Estabilización.**—El Plan de Estabilización Económica de Siles ha encontrado desde su publicación una fuerte resistencia en los sectores izquierdistas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (M. N. R.), que gobierna el país desde el año 1952, y al que pertenece el presidente. (Para apoyar su plan Siles declaró a principios de año una huelga de hambre, y cuatro meses después amenazó presentar su renuncia.)

El Plan de Estabilización Económica se proclamó el 15 de diciembre pasado. Desde hacía ya varios meses el Gobierno venía estudiando una serie de medidas para detener la aguda inflación que como un cáncer roía las entrañas de Bolivia y amenazaba con hacer fracasar las revolucionarias decisiones implantadas por el presidente Paz Estensoro: nacionalización de las minas y reforma agraria.

La profunda transformación económica y social que estas medidas significaban dió origen a una de las más aceleradas espirales inflacionistas del mundo; el dólar que se cotizaba a 200 bolivianos en el año 1952 llegó a cotizarse a 14.000 bolivianos en diciembre del año pasado.

Fué entonces cuando el Gobierno de Siles tomó una decisión enérgica y «valiente», como dijeron los delegados de la CEPAL reunidos el mes de mayo en La Paz: suprimió los controles, estableció el cambio libre y congeló los sueldos y salarios.

El valor del peso subió rápidamente, para quedar estabilizado alrededor de los 7.700 bolivianos el dólar.

Pero ello provocó graves trastornos en los barrios obreros, en las zonas mineras que sostienen la economía del país, y en las familias de los empleados públicos.

«El Plan de Estabilización se desea realizar sobre los sufridos hombros de los mineros bolivianos. Nosotros hemos padecido a los «barones del estaño», hemos desafiado al Ejército y triunfado en la revolución, y ahora nuestro Gobierno revolucionario implanta una serie de medidas que sólo sobre nosotros recaen. Es en este aspecto en el que criticamos al Plan», comentó un dirigente sindical.